

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

EXCMO. SR.:

... con domicilio a efectos de notificaciones en C/. Hernán Cortés núm. 6 de València, actuando en nombre y representación de la expresada Corporación, comparece y **DICE**:

Habiendo tenido conocimiento del anuncio de la licitación para el Contrato de servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de ejecución de la obra, coordinación de seguridad y salud, programación y seguimiento de control de calidad y asistencia técnica de instalaciones, de la obra de reforma del CEIP Sant Lloreç Màrtir, de Massalfassar, EDIFICANT, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público del pasado 8 de marzo de 2024, (Expediente 1476/2023), y dentro del plazo legal que se concede en el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público, formulamos el presente **RECURSO ESPECIAL** en base a los siguientes

FUNDAMENTOS

PRIMERO. - FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y ESTATUTARIOS DE LA LEGITIMACIÓN DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS.

La legitimación de los Colegios Profesionales para intervenir en defensa de los derechos e intereses legítimos, colectivos y los profesionales de sus colegiados está expresamente reconocida en nuestro ordenamiento jurídico y en particular en la normativa de colegios profesionales.

La propia Ley de Colegios Profesionales 13 de febrero de 1974 entre las funciones que enumera de los Colegios Profesionales en el artículo 5.g), atribuye a los mismos: "ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte, en cuanto litigios afecten a los servicios profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, del artículo 1 de esta Ley". El artículo 9.1 a de la misma Ley atribuye estas funciones a los Consejos Superiores o Generales de los Colegios profesionales "en cuanto tengan ámbito o repercusión nacional".

Las diferentes leyes autonómicas de Colegios Profesionales contemplan la atribución a los mismos de estas funciones.

Ha de destacarse que esta atribución legal de poder intervenir "en cuanto a litigios afecten a los intereses profesionales" se configura en términos amplios, es decir siempre que haya una

CTAV COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALÈNCIA

“afectación” a los mismos que tienen un fundamento esencial que se expresa en el mismo artículo 5.g de la Ley de Colegios Profesionales, en la circunstancia de que estas Corporaciones de Derecho Público ostentan en su ámbito propio de actuación “la representación y defensa de la profesión”. Por tanto, la legitimación de los Colegios Profesionales es una atribución legal esencial para el cumplimiento de sus fines propios y se proyecta en una doble dimensión: la defensa de los intereses de los profesionales; y de la profesión en su conjunto es decir del interés general o colectivo de la profesión ante los poderes públicos.

En el ámbito concreto de la regulación estatutaria de los Colegios de Arquitectos, cabe mencionar el artículo 6.2 de los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y su Consejo Superior, aprobados por RD 129/2018, de 16 de marzo, que atribuyen al Consejo Superior la función de “representar y defender unitariamente a la profesión” y el artículo 51.1.a), que dispone que entre sus funciones está la de “representar unitariamente la profesión de arquitecto, procurando los intereses profesionales”. Y en general, tienen entre sus funciones todas aquellas que “revistan interés común y general para la profesión” (artículo 51.5 de los referidos Estatutos Generales). Y en cuanto a los Colegios de Arquitectos el artículo 3.d, les atribuye entre sus fines “...defender los intereses generales de la profesión, en particular en su relación con los poderes públicos”. Y en la misma línea el artículo 7.2 a y b disponiendo este apartado entre las funciones de los Colegios de Arquitectos la de: “Actuar ante los Jueces y Tribunales, dentro y fuera de su ámbito territorial, tanto en nombre propio y en defensa de los intereses de la profesión y de los profesionales de sus miembros, como en nombre, por cuenta y en sustitución procesal de éstos, en la defensa que ellos mismos voluntariamente les encomienden”.

III.- Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la legitimación de los Colegios profesionales.

El Tribunal Constitucional tiene elaborada una completa doctrina sobre la legitimación de los colegios profesionales como corporaciones de Derecho público y titulares del derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto están facultados para intervenir y recurrir resoluciones y actos administrativos en defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos y los profesionales de sus colegiados.

Esta doctrina constitucional tiene destacada importancia para el objeto de este informe, especialmente en dos sentencias del TC, las sentencias 38/2010 de 19 Jul. 2010, Rec. 10094/2006 y 67/2010 de 18 Oct. 2010, Rec. 8750/2006. Ambas sentencias estimaron sendos recursos de amparo interpuestos por el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) contra sentencias que habían inadmitido por falta de legitimación los recursos interpuestos contra procedimientos en materia de contratación pública. En la primera de las sentencias citadas el motivo del recurso se centraba en que la convocatoria del concurso no se había publicado en los medios oficiales legalmente establecidos y en la segunda de las sentencias citadas la cuestión se refería a que la convocatoria era de proyecto y ejecución de obra por lo que se privaba a los colegiados de acceder a la fase de redacción del proyecto.

Los aspectos más destacados de esta doctrina constitucional se pueden sintetizar en las siguientes consideraciones, en la sentencia del 19 de julio de 2010 se dice:

CTAV COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALÈNCIA

“El examen de la queja planteada debe partir del presupuesto de que este Tribunal ya ha reconocido a los colegios profesionales, en tanto que corporaciones de Derecho público, la titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso al proceso (STC 45/2004, de 23 de marzo, FJ 3),....”.

“Dada la trascendencia que para la tutela judicial tienen las decisiones que deniegan el acceso a la jurisdicción, su control constitucional ha de realizarse de forma especialmente intensa, más allá de la verificación de que no se trata de resoluciones arbitrarias, manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente. Dicho control procede a través de los criterios que proporciona el principio pro actione, entendido no como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión, sino como la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulte desproporcionadas entre los fines que se pretenden preservar y los intereses que sacrifican (SSTC 88/1997, de 5 de mayo, FJ 2; 45/2004, de 23 de marzo, FJ 4; 73/2004, de 22 de abril, FJ 3; 119/2008, de 13 de octubre, FJ 4; 184/2008, de 22 de diciembre, FJ 3; 28/2009, de 26 de enero, FJ 2; 183/2009, de 7 de septiembre, FJ 3)”.

La misma sentencia del TC precisa que se entiende por interés legítimo al decir que:

“...Se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Dicho de otro modo, se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta...”.

Y la sentencia del TC deja muy claro que el COAM estaba legitimado plenamente teniendo en cuenta:

“...la indiscutible competencia de los arquitectos para intervenir en la elaboración de los instrumentos de planeamiento urbanístico objeto de la convocatoria, es evidente, como el Ministerio Fiscal pone de manifiesto en su escrito de alegaciones, que la pretensión ejercitada por el colegio profesional en el recurso contencioso-administrativo, esto es, que se procediese a la publicación de la convocatoria del concurso en los medios oficiales legalmente establecidos, puede subsumirse tanto en el ámbito de la representación y defensa del interés general o colectivo de la profesión misma, como en el ámbito de la defensa de los intereses de los profesionales colegiados, pues mediante la publicidad pretendida se perseguía en defensa de los intereses de la profesión la libre concurrencia en términos de igualdad en un proceso de licitación de indudable competencia de los arquitectos, a la vez que, en defensa de los intereses de sus colegiados, se quería que éstos a través de los medios legalmente establecidos pudieran tener conocimiento de la convocatoria llevada a cabo y evitar que vieran cercenadas sus posibilidades de participación como consecuencia de una indebida publicidad del concurso, lo que para ellos suponía una indudable y concreta ventaja o utilidad, estrechamente conectada con el fin del colegio de defender los intereses profesionales de sus colegiados...”.

Reitera la anterior doctrina la segunda de las sentencias dictadas del TC de 18 de octubre de 2010 mencionando la Ley de Colegios Profesionales y el artículo 19 de la LJCA que atribuye la legitimación en el orden jurisdiccional contencioso -administrativo a las corporaciones de derecho público que “estén legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos”.

CTAV COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALÈNCIA

La sentencia del TC hace una precisión importante al distinguir entre las funciones propias de los Colegios Profesionales, las que se refieren a la defensa de la profesión y las de la defensa de los intereses profesionales de los colegiados. Así se dice:

“De la anterior normativa se desprende que, entre las funciones propias de los colegios profesionales, se encuentra la representación y defensa de la profesión, función diferenciada de la defensa de los intereses profesionales de los colegiados. Y, como afirmamos en la STC 45/2004, FJ 5, mientras que para la defensa de los intereses de los profesionales colegiados pueden concurrir tanto los colegios profesionales como los propios colegiados cuando resulten individualmente afectados, así como otras personas jurídicas, tales como sindicatos y asociaciones profesionales, por el contrario, cuando se trata de la representación y defensa de la profesión misma, esto es, del interés general o colectivo de la profesión, esa función representativa y de defensa ante los poderes públicos se ejerce por los colegios profesionales, bajo la nota de exclusividad o monopolio”.

En cuanto al recurso la sentencia entendió que no procedía negar la legitimación al COAM, ya que por parte del mismo:

“..se reivindica ininterrumpidamente la defensa de los principios de igualdad y libre concurrencia a los concursos públicos, es evidente que se trata de la defensa de principios que interesan no sólo a sus colegiados, sino a la totalidad de la profesión de arquitecto, sin que la repercusión de dicha defensa en la generalidad del colectivo profesional pueda identificarse, como pretende la Universidad convocante, con una legitimación abstracta y falta de vínculo con el objeto del recurso Contencioso-Administrativo.

Por tanto, se puede llegar a la conclusión de que el COAM ejerció su acción ante la jurisdicción ordinaria frente a la propia concepción de la convocatoria en su modalidad, excepcional, de contratación conjunta del art. 125 LCAP, basándose en el menoscabo que, en las posibilidades de concurrir, sufrirían a su juicio todos aquellos profesionales que, capaces de llevar a cabo la redacción del proyecto, no reunieran sin embargo los requisitos exigidos para poder ejecutar el mismo, por ser ajenos a las empresas constructoras con capacidad para ejecutar unas obras de tal magnitud”.

IV.- La legitimación en el ámbito de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP) y en concreto para la interposición del recurso especial.

La LCSP regula el recurso especial en materia de contratación pública en los artículos 44 a 60. El recurso se configura como un recurso de carácter especial y potestativo en unos supuestos concretos que enumera el artículo 44 de la Ley y cuya resolución corresponde en el ámbito del sector público estatal al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC),

A lo efectos que aquí nos atañen, el artículo 48 de la LCSP contiene una disposición específica sobre la legitimación activa para interponer el recurso especial, y que en gran medida sirve de referencia normativa para la interposición de recursos en el ámbito de la contratación pública.

El párrafo primero del artículo 48 de la LCSP dispone:

“Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso”.

CTAV COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALÈNCIA

Del tenor literal del precepto se desprende, como se ha destacado por la doctrina y la jurisprudencia, que se produce una ampliación considerable de la legitimación para recurrir y en particular para las personas jurídicas, entre las que se encuentran las corporaciones profesionales. Esta ampliación de la legitimación está en consonancia con el ámbito de aplicación del recurso especial que ahora abarca en su objeto a más actuaciones y entre ellas específicamente los anuncios de licitación y los pliegos.

Así, conforme al artículo 46 de la LCSP, las personas jurídicas pueden interponer dicho recurso cuando no solo los derechos e intereses legítimos individuales resulten afectados, sino también los "colectivos" que en nuestro caso tiene un especial transcendencia por cuanto conforme a la doctrina constitucional antes expuesta, los Colegios Profesionales pueden interponer recursos cuando resulten afectados los intereses individuales de los colegiados y cuando actúen en defensa del interés colectivo de la profesión. Por ello el artículo 48 de la LCSP ha recogido la doctrina constitucional mencionada.

Y el segundo elemento que contiene dicho precepto legal y que supone una ampliación de la legitimación para recurrir atañe el núcleo esencial de lo que se entiende por interés legítimo. Así concurrirá legitimación cuando esos intereses legítimos individuales o colectivos "se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso". Es decir, una persona jurídica estará legitimada no solo cuando haya un perjuicio directo a dichos intereses legítimos sino también cuando haya una afectación que puede ser directa o indirecta por las decisiones objeto del recurso.

Por tanto, en el concepto de legitimación para la interposición de recursos en materia de contratación pública, la evolución jurisprudencial y normativa ha consistido en mantener una interpretación amplia, con especial incidencia para las personas jurídicas en la defensa de los derechos e intereses legítimos tanto individuales como colectivos, lo que se proyecta en la actuación de los Colegios Profesionales que legal y estatutariamente están facultados para intervenir en los procedimientos que afecten a los profesionales y a la profesión.

En la contratación pública, ello se traduce en la legitimación de los Colegios Profesionales para recurrir los pliegos de aquellas licitaciones que, en las condiciones de acceso, de participación, de garantías del procedimiento y criterios de adjudicación, entre otros aspectos resulten lesivos para dichos intereses legítimos individuales y colectivos. Siempre que exista una afectación, aunque sea indirecta para tales derechos e intereses, habrá que entender que existe interés legítimo y por tanto legitimación.

V.- La doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) sobre la legitimación de los colegios profesionales: su evolución y las últimas resoluciones con una interpretación restrictiva.

Sobre la legitimación activa de los colegios profesionales para interponer recursos contra actos y resoluciones en el ámbito de la contratación pública existe una abundante doctrina del TACRC que se fundamenta en admitir dicha legitimación siempre y cuando resulten afectados por dichos actos y disposiciones impugnados los intereses profesionales, afectación que se concreta en que incida en el ejercicio profesional.

(resoluciones, entre otras muchas 617/2021 de 29 de mayo, 521/2022 de 6 de mayo, 1089/2022 de 21 de septiembre y 1378/2022 de 15 de diciembre).

Esta formulación del TACRC reconoce la legitimación activa de los Colegios Profesionales, acorde con la doctrina constitucional, emitiéndose resoluciones, en concreto sobre el procedimiento aplicable, condiciones de solvencia y criterios de adjudicación, entre otras cuestiones y sin fijar criterios limitativos, reconociéndose la legitimación siempre que se produzca esa afectación de los intereses profesionales.

Así cabe mencionar entre estas resoluciones:

- Resolución 743/2019 en la que precisamente se impugnaba por el Consejo Superior de los Arquitectos de España la no aplicación del concurso de proyectos en una licitación de AENA. Dice la resolución:

“La recurrente ostenta la legitimación exigida conforme con lo dispuesto en el artículo 48 de la LCSP y el artículo 24.1 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, tal y como ha reconocido este Tribunal (Recurso nº 1100/2018 Resolución nº 1124/2018 de fecha 7 de diciembre de 2018.) a partir de la interpretación amplia que el Tribunal Constitucional ha deparado en relación con el concepto de legitimación activa (Sentencias núm. 119/2008, de 13 octubre y número 38/2010, de 19 de junio”.

- En el mismo sentido la resolución del TACRC de 4 de julio de 2019 (resolución 742/2019), en la que también era parte recurrente el Col.legi d'Arquitectes de Catalunya y en la que, al igual que sucede en este recurso, se dirimía la aplicación del concurso de proyectos y se reconoció la plena legitimación del Colegio recurrente, reiterándose los fundamentos contenidos en la resolución antes citada.

- Resolución del TACRC 1300/2021 de 29 de septiembre que resolvió un recurso de Tecniberia contra una licitación que establecía subasta electrónica, lo que determinaba la nulidad ya que está excluida en la adjudicación de prestaciones intelectuales como son los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura. Se reconoció la legitimación por cuanto la estimación del recurso afectan a los intereses colectivos de los asociados “a lo que puede interesar una restricción del uso de un medio novedoso que implica cargas para el administrado y que, en definitiva, quiere favorecer la baja de la oferta, lo cual sin duda no es de interés del contratista.

- Resolución 1710/2021 de 25 de noviembre en la que el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (CGOAT) interpusieron recurso especial contra una licitación de SEGIPSA que exigía una habilitación profesional de homologación en una sociedad de tasación, como criterio de solvencia para realizar determinadas tasaciones.

SEGUNDO. - LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SE REQUIERE A LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EXPERIENCIA.

Nos encontramos ante un contrato no Sara, cuyo umbral viene definido en el artículo 22.1, “b) 221.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social”

Dice el pliego de condiciones:

“De conformidad con el artículo 90.1 a) y 90.4 de la LCSP y artículos 11.4b) y 67.7b) del RGLCAP, se acreditará con los siguientes medios:

1. Relación de los principales servicios o trabajos realizados por el licitador durante los 10 últimos años, de redacción de proyectos con relación directa con el objeto del contrato. Dicha relación incluirá el importe, fechas y destinatario y se acreditará mediante certificados expedidos por el destinatario. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución será superior a 214.412,66 €. Deberá indicarse el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Y para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se atenderá preferente a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV, aunque también podrá acudir a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del contrato.
2. Titulaciones Académicas del personal del equipo de dirección y/o plantilla de la empresa responsable de la ejecución del contrato, entre los que deberá constar los siguientes:
 - a. Un arquitecto.
 - b. Un aparejador o arquitecto técnico.
 - c. Un técnico competente en materia de seguridad y salud.
 - d. Un ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial”

A juicio de este Colegio, el presente concurso, no cumple, a pesar de citar las empresas de nueva creación del artículo 90.4 de la LCSP, a las que no se les puede exigir experiencia alguna.

El art. 90.4 de la LCSP dice: “En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiéndose por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a i) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de servicios”

Supone una vulneración del principio de concurrencia, vinculado al de igualdad y no discriminación (artículo 1º de la LCSP), puesto que, a través de estos, se garantiza que participen de los procedimientos de licitación el mayor número posible de licitadores en igualdad de condiciones, y sin dejar fuera a los que no tienen aún esa experiencia.

Y el artículo 1 de la LCSP establece:

“Objeto y finalidad.

1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.”

IV.-PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Mediante el principio de igualdad de trato y no discriminación se exige que las situaciones comparables no reciban un trato diferente y que no se trate de manera idéntica situaciones diferentes. Se pretende favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una contratación pública. Es exigible que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas y que éstas estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores.

En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2000 (Sala de lo Contencioso-Administrativo) que entre los principios esenciales que rigen la contratación administrativa, está la igualdad de acceso entre las distintas empresas dedicadas a la contratación pública y el procedimiento de contratación que tiende a garantizar el interés público mediante la articulación de tres principios cardinales de la licitación: el principio de publicidad, el principio de libre competencia y el principio de igualdad de oportunidades. Por consiguiente, el principio de igualdad y la prohibición de toda discriminación son principios fundamentales que deben respetarse en todo caso y a lo largo de todo el proceso de contratación.

La LCSP 2017 dedica el primero de sus preceptos a los principios generales de la contratación pública y así establece en su apartado 1 que la norma tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores

El Título I de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE se intitula "Ámbito de aplicación, definiciones y principios generales" y dedica su artículo 2 GIMENO FELIU, "Las nuevas Directivas –cuarta generación en materia de contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública", REDA núm. 159 (2013), págs. 25 y ss. Gabilex Nº Extraordinario Marzo 2019 <http://gabilex.castillalamancha.es> 23 18 a los "Principios de la contratación" para establecer que "los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada. La contratación no será concebida con el objetivo de excluirla del ámbito de aplicación de la presente Directiva ni de restringir artificialmente la competencia".

Principios reconocidos por el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea y, en particular la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios y de los principios derivados de la misma, tales como el de la igualdad de trato, no discriminación, el reconocimiento mutuo, la proporcionalidad y la transparencia" y se hace alusión reiterada a los mismos a lo largo de toda la exposición de motivos de la Directiva 2014/24 (considerandos 12, 31, 40, 58, 68, 101, 114 y 136) 5. Así lo exigen distintos preceptos de los tratados de derecho originario, tal y como han sido interpretados por el propio Tribunal (STJUE de 13 de octubre de 2005, asunto C 458/03, Parking Brixen GMBH)7. El TJUE ha reiterado que el principio de igualdad de trato de los licitadores, que constituye la base de las directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, y el objetivo de favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una licitación pública, exige que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades en la formulación de los términos de sus ofertas e implica pues que éstas se sometan a las mismas condiciones para todos.

CTAV COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALÈNCIA

En virtud de lo expuesto,

SOLICITO a VI, tenga por presentado Recurso de Reposición en tiempo y forma, y acuerde corregir el pliego de condiciones en el sentido solicitado, y excluyan la experiencia del personal requerido en los criterios de solvencia técnica de acuerdo con el artículo 90.4 de la LCSP, suspendiendo el plazo para la adjudicación del concurso.

En València, a 26 de marzo de 2024

